TRIBUNAL ELECTORAL REGIÓN DE LOS RÍOS

Valdivia, veintiocho de noviembre del dos mil veinticinco

VISTO:

De fojas 1 a 41, comparece Cristian Israel Godoy Vera y otros concejales de la Municipalidad de Panguipulli, quienes interponen requerimiento por notable abandono de deberes y falta grave a la probidad administrativa en contra del ex alcalde de la Municipalidad de Panguipulli, sr. Pedro Burgos Vásquez, por haber incurrido en faltas graves a la probidad y notable abandono de sus deberes como alcalde de la Municipalidad de Panguipulli y presidente de los directorios de la Corporación de Salud y Educación Municipal (CORMUPA) y la Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli (en adelante e indistintamente CMD), ambos cargos que ocupó de pleno derecho por ser alcalde de Panguipulli, cometiendo una infracción grave de las causales contempladas en el artículo 60 de la ley Nº 18.695 orgánica Constitucional de Municipalidades, con base y fundamentos en los hechos referidos primeramente a las inhabilidades y falta de abstención por conflicto de interés; se expresa que Pedro Burgos Vásquez, ex alcalde, realizó una serie de contrataciones sin fundamento administrativo, en las cuales pagó indiscriminadamente millones de pesos a su familia, su actual pareja y por afinidad; Estas acciones, constituyen faltas graves a la probidad y evidencia un incumplimiento de sus deberes éticos y legales; Añade que en cuanto doña Cynthia Elisa Camino Jarpa es la actual pareja del ex alcalde Pedro Burgos, que, al inicio de su mandato, era funcionaria a honorarios en la Municipalidad de Panguipulli. Desde diciembre de 2021, ella ganaba \$684.667 al mes y, al año siguiente, pasó a trabajar en la



Corporación Municipal de Deportes y Recreación (CMD) con un sueldo significativamente más alto de \$1.825.250, habiendo irregularidades en su contratación, ya que no hubo concurso público. La falta de un proceso transparente y la asignación de un sueldo alto, comparable al de otros profesionales con más experiencia, habiendo conflicto de intereses por parte de Burgos. Él no se abstuvo de intervenir en este asunto, favoreciendo a su pareja y violando el principio de probidad administrativa al utilizar la Corporación como un medio para emplearla. Esto resalta serias preocupaciones sobre la ética y la transparencia en la administración de Burgos; amplía que, en cuanto a la contratación de la hija de su cónyuge, señala que se consultó a la Contraloría Regional de Los Ríos sobre la contratación de la hija de su cónyuge, específicamente sobre el comportamiento del Sr. Burgos Vásquez al firmar convenios de honorarios y los decretos asociados. El Sr. Burgos está casado con Yasna Martínez Ochoa, madre de Francisca Lasserre Martínez, quien es su hijastra. A pesar de que Francisca ingresó al municipio en 2017, el Sr. Burgos firmó convenios con ella en 2023 y 2024, además de firmar los decretos que los aprobaron. Enfatiza que el último convenio fue firmado el 1 de noviembre de 2024, un día feriado en el que no hubo trabajo municipal. Esto infringe el artículo 62 de la Ley 18.575, que prohíbe intervenir en asuntos que interesen a familiares cercanos, lo que se comprobó en el caso del Sr. Burgos. La Contraloría considera que no se abstuvo de intervenir, y podría enviar los antecedentes a la justicia electoral dentro del plazo señalado en el artículo 51 bis de la Ley 18.695. También se encontró que, en 2024, el Sr. Burgos aumentó el salario de su hijastra sin justificación, utilizando fondos municipales, lo que es irregular. Este incremento de sueldo sobrepasó el salario de otros funcionarios, sin evaluación sin respaldo. Se concluye que el Sr. Burgos ha violado gravemente el principio de probidad administrativa al favorecer a familiares con recursos públicos. Primero, al contratar a su pareja y



triplicar su sueldo sin un concurso público, y, en segundo lugar, al beneficiar a su hijastra con un aumento de sueldo injustificado. Estas acciones son consideradas como una seria falta a la probidad, usando el dinero público para favorecer a personas cercanas en lugar de abstenerse de participar en esos contratos; indica que, en cuanto la Frustrada compra de Terreno en Chauquén, señala que el Sr. Burgos, en los últimos días de su mandato, buscó comprar un terreno en Panguipulli, a pesar de la oposición de sus asesores. El terreno, correspondiente al Lote D, pertenece a don Luis Carlos Gonzales Mora y otros, y su valor fiscal es de \$22.531.206. La compra se intentó realizar por un total de \$200.000.000, a pagar en tres cuotas durante tres años, comprometiendo el presupuesto municipal. Un informe del director de SECPLAN de ese momento, don Roberto Montecino Vergara, mencionó que se necesitaba autorización del Ministerio de Hacienda para este tipo de contratos, según la Ley 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, esta autorización nunca fue solicitada, y no se explicó la razón de esta omisión. Además, se sabía que el municipio no podía contratar con miembros del COSOC, del cual don Luis González Mora era Vicepresidente. Esta situación es irregular, ya que la negociación ocurrió cerca de una campaña electoral, y el Sr. González Mora era un apoyo firme del exalcalde Burgos, apareciendo junto a él en eventos de campaña. Se plantean preguntas sobre por qué el exalcalde no solicitó la autorización necesaria, si el ministerio de Hacienda hubiera aprobado la compra, y por qué se ignoraron las advertencias sobre la imposibilidad de contratar con don Luis González Mora. También se señala que continuar con el proceso, a pesar de las recomendaciones, es una gran torpeza. Se enfatiza que se aprobó pagar diez veces el valor del avalúo fiscal a un partidario, al mismo tiempo de haber contratado al hijo de este vicepresidente del COSOC en el municipio; adiciona que, sobre el no pago de los servicios básico, la municipalidad de Panguipulli, al finalizar el mandato del ex alcalde Pedro Burgos, dejó graves deudas por servicios



básicos, incluyendo el suministro de internet, y en algunos casos, arriendos, lo cual constituye un evidente abandono de deberes. Alude que el servicio de acceso a internet se ha convertido en una necesidad fundamental los servicios públicos interconexión para У la interinstitucional, como la plataforma doc. digital. Que la municipalidad de Panguipulli, durante más de 20 años, ha mantenido contratos con Telefónica del Sur, hoy GTD. Sin embargo, en febrero de 2024, se recibió una comunicación de GTD informando sobre deudas impagas por facturas desde al menos septiembre de 2023, con una orden de corte del suministro que se mantuvo durante todo el año. Además, posteriormente se descubrió que las deudas existían desde 2022, evidenciando un incumplimiento en el pago de este servicio durante la gestión anterior; adiciona también, que la no rendición de fondos públicos es un problema grave que impide transferir más recursos y restringe futuros aportes debido a la negligencia de las instituciones. Este proceso está regulado por la Resolución Nº 30 de 2015 de la Contraloría General. El ex alcalde Burgos ha sido responsable de los atrasos en la rendición, que se han acumulado desde 2021. Desde el 06 de diciembre de 2024, se han aprobado 139 rendiciones por un total de \$2.871.656.623. Para 2025, se priorizarán los programas que generen ingresos, ya que el Servicio de Salud Valdivia no transferirá nuevos fondos hasta que se rindan completamente los anteriores. Esta medida se aplica a varios programas de financiamiento mensual, incluyendo SAR, SUR, CECOSF, Leyes y Per Cápita. Hasta ahora, se han cerrado 46 programas de 2021 a 2024, aunque quedan 382 rendiciones pendientes. El Analista Ejecutor tiene 12 rendiciones en proceso, el ministro de Fe revisa 292, y el Encargado Ejecutor tiene 78 rendiciones sin movimiento. Se adjunta el MEMO 438/2025 donde se detalla programa a programa, los montos involucrados y el estado de las rendiciones, manifiesta la parte reclamante que resulta realmente obsceno verificar la cantidad de proyectos sin



rendir y los montos que involucran; adiciona además, que en cuánto sobre los juicios y el daño a la fe pública el sr. Burgos de manera consiente y reiterada, hizo caso omiso a la palabra de sus propios asesores y de un modo caprichoso y violento, vulneró en más de una ocasión el marco legal sin una justificación aparente, nos referiremos a dos situaciones que en particular afectan el patrimonio de la municipalidad y la fe pública y dicen relación con dos procesos judiciales: La causa ROL C-328-2. 023 se originó por el término anticipado del contrato para la construcción de infraestructura sanitaria en Neltume, Panguipulli, incumplimientos. El problema surge porque el Sr. Burgos, en contra de lo que decía el contrato y las Bases Administrativas Especiales, ordenó mediante un decreto el cobro total de las garantías de cumplimiento y restitución del anticipo por montos de 14.782,54 UF y 20.914,00 UF, respectivamente. Las Bases establecían que solo la Comisión de Recepción Única podía autorizar el cobro de estas garantías, lo que implicaba que el alcalde no tenía la autoridad para hacerlo. Como resultado, la empresa demandó al municipio por indemnización, alegando daños por el actuar ilegal del alcalde. Se destaca que el dinero de las garantías no pertenecía al municipio, sino al Gobierno Regional de Los Ríos, lo que podría resultar en una condena que obligue al municipio a pagar por fondos que nunca tuvo. Que la mala actuación del Sr. Burgos podría afectar gravemente el patrimonio de la Municipalidad, ya que el juicio implica más de 4.800 millones de pesos. Además, se menciona que el alcalde violó principios legales y normativos relacionados con la contratación administrativa. Se resalta que el contrato y las bases son parte de un todo, lo cual se considera en la denuncia. La sentencia está pendiente y debe dictarse a más tardar el 21 de junio; En el caso rol c-510-2.024, se discute un daño patrimonial y se señala que se afectó la confianza pública. La demanda se dirige contra cuatro comités de vivienda y el municipio. Antes de esta causa, había otra demanda, rol c-47-2.024,



donde se demandó a la municipalidad correctamente antes de la transferencia de un terreno en disputa. La municipalidad adquirió un inmueble de la sociedad Inmobiliaria y Constructora Santa María Limitada sin seguir los pasos técnicos y legales necesarios. No se verificaron los límites del terreno y no se consideraron problemas legales existentes, a pesar de que la empresa vendedora tenía problemas judiciales conocidos. A pesar de la irregularidad, la municipalidad, bajo el ex alcalde Burgos, transfirió el terreno a cuatro comités de vivienda, quienes recibieron un bien en disputa sin saberlo. Estos comités son: Comité de Vivienda Camino al Futuro, Comité de Vivienda Antu Killen Panguipulli, Comité de Vivienda Las Camelias y Comité de Vivienda El Nogal. La transferencia se realizó mediante una escritura firmada el 1 de abril de 2024, que no exime a la municipalidad de su obligación de entregar el terreno en condiciones adecuadas. El ex alcalde tenía conocimiento de los problemas legales y, a pesar de esto, realizó la transferencia, dejando a los comités en una situación difícil, ya que no pueden construir en el terreno. Las familias ahora deben contratar abogados para defenderse. El juicio sigue en curso y hay inquietudes sobre las posibles restituciones y quién asumirá la responsabilidad por el daño al municipio y al bienestar de los comités. Se considera que esta situación podría haberse evitado si la autoridad hubiera actuado con honestidad. El ex alcalde es responsable del saneamiento por evicción de la propiedad comprada, según los artículos 1.837 y siguientes del Código Civil. En vez de atender esta responsabilidad, apresuró la venta a cuatro comités, quienes no son culpables de su negligencia y falta de respeto a la normativa. Estos comités deben gastar en abogados y enfrentarse a la dilatación del sueño de tener casa propia debido a la negligencia del señor Burgos Vásquez. Su comportamiento muestra un abandono de deberes, firmando documentos sin autoridad y trasladando problemas a los comités de vivienda a pesar de conocer un conflicto judicial. Esto perjudica el patrimonio y la imagen



de la municipalidad y la comunidad. Si el municipio pierde la causa c-328-2.023, tendrá que pagar indemnizaciones que superan su presupuesto anual para la planta municipal, todo por la actitud incomprensible del ex alcalde. Se observa un patrón de comportamiento en el que vulneró la ley y la constitución, afectando al municipio y a la comunidad; también señala, que en cuanto a la malversación de fondos públicos CORMUPA, la problemática está relacionada con la transferencia de fondos solicitados de la SUBDERE desde 2022, que estaban destinados a pagar bonos para el personal del área de Salud. Desde 2021, algunos bonos se depositaron en la cuenta presupuestaria N° 71909000097 de Administración, que recibía todos los bonos, y de ahí debían distribuirse a las cuentas correctas. Sin embargo, no se realizaron todas las transferencias a la cuenta Nº 71909000071 del área de Salud. Para cumplir con los plazos, se usaron recursos per cápita para pagar los bonos, esperando un reembolso que nunca se concretó. Que, al revisar la contabilidad de Administración, se hallaron ingresos incorrectamente registrados en la cuenta 115-08-99-001 Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuestos. Fue necesario rehacer la contabilidad de muchos ingresos de 2024 y realizar un análisis detallado de las cuentas de traspaso. De los hallazgos encontrados en el 2024, de desde la CORMUPA pidió un monto mayor de \$102.890.777 para el pago de Bono Escolar, aunque solo se gastaron \$61.139.717, quedando una diferencia en la cuenta de administración. Se mencionan montos pendientes de transferir a otras áreas. También se identificaron transferencias pendientes de devolución, correspondientes de anticipos entregados desde las cuentas corrientes presupuestarias de Administración hacia Educación y JUNJI. Desde la cuenta Administración Presupuestaria, se autorizó un anticipo de \$22.457.200 para Educación, y desde la cuenta de Intereses de Administración, se asignaron \$12.800.000 a JUNJI y \$52.281.740 a Educación, ambos por atrasos en aportes municipales. Actualmente se están corrigiendo



registros de ingresos de 2023 y 2022 para verificar montos no transferidos a las áreas correspondientes, y el área de Salud asegura que no se recibieron ciertos bonos en 2022 como bono de vacaciones de \$33.400.000; bono termino de conflicto de \$63.365.000; aguinaldo de navidad año 2021 \$22.460.440; bono escolar \$17.051.384, el monto total pendiente a transferir es de \$ 136.276.28. La encargada del área de Licencias informó que en 2022 se retiraron fondos de la cuenta corriente Nº 71909000348, relacionada con la administración de licencias médicas. Este retiro fue autorizado por Felipe Rodríguez Vidal, quien era jefe del Departamento de Administración y Finanzas. El retiro fue un anticipo para el pago de la franquicia tributaria de 2022, pero la devolución fue retenida por el Servicio de Impuestos Internos (SII) durante la declaración de renta, lo que impidió que se devolviera a tiempo a los intermediarios del OTIC Cimientos. Posteriormente, el 02 de diciembre de 2024, se recibieron los fondos después de resolver las observaciones. El monto pendiente de devolver es de \$41.689.044, y ya se emitió un decreto para cancelar este anticipo y distribuir el pago de licencias. Estos antecedentes se enviarán al Ministerio Público debido a posibles indicios de malversación de fondos públicos; adiciona que, sobre pagos a un miembro del Concejo Municipal en ejercicio con fondos de la CMD, donde la Contraloría Regional de Los Ríos realizó una auditoría a la CMD, cuyos resultados están en el informe 76/2.025 del 30 de abril de 2.025. Se abordaron varios temas, incluyendo pagos al concejal Carlos Durán durante el mandato del Sr. Burgos. Se encontró que los depósitos a Durán se hicieron de la misma manera por una funcionaria contratada por Burgos, lo cual es considerado una irregularidad grave, ya que Burgos debía estar al tanto de estos depósitos. La contraloría en su informe señala que se hicieron al menos dos depósitos al concejal Carlos Durán Romero durante el periodo revisado. El primero fue un cheque de \$1.218.000, depositado por Lisseth Jaramillo Retamal en febrero de 2023.



El segundo cheque, de \$150.000, se depositó en marzo de 2023. Además, se recuerda que, según la ley N° 18.695, el alcalde necesita el acuerdo del concejo municipal para otorgar subvenciones y aportes para financiar actividades comprendidas entre las funciones de las municipalidades, a personas jurídicas de carácter publica o privadas, sin fines de lucro, y ponerles término, entre las cuales se encuentra la corporación en estudio, tal como se expone en el numeral 15 en el presente informe. La situación descrita es grave debido a que los concejales deben actuar como fiscalizadores. Hay preocupación sobre la imparcialidad cuando un concejal recibe dinero de una institución. Las cifras verificadas por la Contraloría son preocupantes, ya que un depósito de más de un millón de pesos indica que el concejal debía estar al tanto. Se cuestiona por qué no actuó al respecto. Además, se recalca la importancia de la funcionaria Lisseth Jaramillo, quien hizo depósitos en la cuenta del concejal, esta irregularidad parece intencional y no pudo ser ignorada por el Sr. Burgos Vásquez, ya que no había un contrato firmado entre la CMD y el concejal, pero los cheques de la entidad sí fueron a parar a su cuenta. La falta de probidad del alcalde es evidente, no puede usar fondos propios o públicos para hacer pagos de esta naturaleza. La contraloría identificó esta situación y exige que se tome acción. El señor Burgos Vásquez debe asumir su responsabilidad, ya que su posible ignorancia sobre el asunto no lo excusa. Su falta de supervisión indica un abandono de deberes, y el pago a un concejal con fondos públicos es una clara falta a la probidad; por último, señalan que el ex alcalde ha incumplido el principio de probidad administrativa al utilizar su cargo para beneficiar a su hijastra y a su pareja actual. Esto va en contra del artículo 62 de la ley 18.575. Además, en un intento de comprar un terreno en Chauquén, abusó de su posición para obtener beneficios indebidos, ignorando las advertencias de sus asesores y no obteniendo la autorización necesaria, lo cual contraviene el artículo 60 de la Ley 18.695; alude que en cuanto al no



pago de servicios básicos, se considera que el ex Alcalde ha abandonado sus deberes al no cumplir con las obligaciones legales relacionadas con la gestión municipal, donde hay serias faltas en la rendición de cuentas, especialmente con los fondos de salud que no están disponibles por su negligencia. Asimismo, mencionan juicios en los que ha actuado de manera ilegal, lo que podría resultar en pérdidas millonarias para el municipio. Conjuntamente, se investiga la malversación de fondos públicos en CORMUPA, donde se desviaron recursos destinados a salud para cubrir problemas financieros de la administración. Esto muestra un patrón de abandono de deberes y prioridades personales sobre el bien común. De esta manera, se han observado pagos indebidos a un concejal del Municipio, lo que plantea dudas sobre su imparcialidad y los efectos en su rol de fiscalización. Todo esto refleja una grave falta a la probidad y un uso inapropiado de fondos públicos; menciona jurisprudencia y doctrina con respecto a conductas que contravienen a la probidad administrativa como el artículo 62 de la ley Nº 18757 de la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la administración del estado, en sus argumentos, y que la responsabilidad del Alcalde se basa en el artículo 118 de la Ley Nº 18.883, donde se establece que los empleados que incumplan sus deberes pueden recibir penalizaciones. La responsabilidad se puede confirmar mediante una investigación. El artículo 60 de la Ley Nº 18.695 señala las causas para remover a un Alcalde, como infracciones graves a la probidad o abandono de deberes. Tras cambios en la ley, los Tribunales Electorales pueden aplicar medidas disciplinarias, excepto destitución, como censura, multa o suspensión de 30 días a seis meses. La responsabilidad administrativa se extingue al cesar funciones, pero puede aplicarse incluso después del mandato del Alcalde por seis meses para inhabilitarlo de ejercer cargos públicos por cinco años; finalmente se solicita tener por interpuesta denuncia por notable abandono de deberes y falta grave a la probidad administrativa en contra del ex alcalde de la Municipalidad de



Panguipulli, sr. Pedro Burgos Vásquez; acompaña los siguientes documentos: Memo Nº 12 de Eduardo Greenhill Asesor Jurídico a Carol Delgado Jeldrez Contralora Los Ríos; Certificado Nacimiento Francisca Ignacia Laserre Martínez RUN 18.590.127-0; certificado Matrimonio Pedro Burgos Vásquez con Yasna Martínez Ochoa; convenio prestación servicios a honorarios de fecha 31 de enero de 2.023 suscrito entre doña Francisca Ignacia Laserre Martínez y Pedro Burgos Vásquez; convenio prestación servicios a honorarios de fecha 02 de enero de 2.024 suscrito entre doña Francisca Ignacia Laserre Martínez y Pedro Burgos Vásquez; convenio prestación servicios a honorarios de fecha 01 de noviembre de 2.024 suscrito entre doña Francisca Ignacia Laserre Martínez y Pedro Burgos Vásquez; convenio prestación servicios a honorarios de fecha 31 de enero de 2.023 suscrito entre doña Francisca Ignacia Laserre Martínez y Pedro Burgos Vásquez; convenio prestación servicios a honorarios de fecha 02 de enero de 2.024 suscrito entre doña Francisca Ignacia Laserre Martínez y Pedro Burgos Vásquez que otorga un pago adicional con fondos propios municipales; decreto Alcaldicio Nº 342 de fecha 31 de enero de 2.023 que aprueba convenio; decreto Alcaldicio Nº 349 de fecha 29 de enero de 2.024 que aprueba convenio; decreto Alcaldicio Nº 3.657 de fecha 21 de noviembre de 2.024 que aprueba convenio; oficio Contraloría Regional de Los Ríos Folio E65008/2025 de fecha 17 de abril de 2.024; informe Contraloría Regional de Los Ríos Folio 76/2025 de fecha 30 de abril de 2.025; convocatoria Concejo Municipal de fecha 30 de abril de 2.025; Copia cédula de identidad de Ariel vega cofre; copia cédula de identidad de Patricia Cariman; copia estatutos CORMUPA; copia Estatutos CMD; Sentencia Tribunal Electoral Regional de los Ríos de fecha 22 de noviembre de 2.024; acta complementaria de proclamación de fecha 29 de noviembre de 2.024; bases administrativas especiales Licitación ID 3573-6-LR21; demanda Causa ROL C-328-2.023; contrato de obras de fecha 18 de junio de 2.021 entre la Municipalidad de Panguipulli y la



Empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A.; ebook Causa ROL C-47-2.024 Juzgado Letras y Garantía de Panguipulli; ebook causa ROL C-510-2.024 Juzgado Letras y Garantía de Panguipulli; sentencia Tribunal Electoral Regional de fecha 08 junio de 2.021ROL 3667-2.021; decreto Alcaldicio Nº 169 de fecha 11 de enero de 2.024 que aprueba el texto refundido del reglamento del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil de la comuna de Panguipulli; acta Nº 01 de 2.024 denominada Acta constitutiva del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil de la comuna de Panguipulli; acta número 25 sesión ordinaria de concejo municipal de fecha 30 de julio de 2.024; informe compraventa inmueble proyecto "Playa Chauquen" remitido como antecedente al H. Concejo Municipal suscrito por don Roberto Montecino Vergara y Cristian Cuadra Aguilar; certificado de prohibiciones e interdicciones González Mora Luis Carlos y otros respecto al resto de derechos sobre el Lote D seis del plano de subdivisión de Lot D, que forma parte del resto no enajenado de la hijuela Nº 18. Correspondiente a la División de la Comunidad Indígena encabezada por don Manuel Truitrui y José Cumilai, Ubicada en el Lugar Lepu, comuna de Panguipulli, perteneciente a don Luis Carlos González Mora y otros, título de dominio inscrito a fojas 603 número 661 del Registro de Propiedad del año 2.015; certificado de Litigios González Mora Luis Carlos y otros respecto al resto de derechos sobre el Lote D seis del plano de subdivisión de Lot D, que forma parte del resto no enajenado de la hijuela Nº 18. Correspondiente a la División de la Comunidad Indígena encabezada por don Manuel Truitrui y José Cumilai, Ubicada en el Lugar Lepu, comuna de Panguipulli, perteneciente a don Luis Carlos González Mora y otros, título de dominio inscrito a fojas 603 número 661 del Registro de Propiedad del año 2.015; certificado de hipotecas y gravámenes González Mora Luis Carlos y otros respecto al resto de derechos sobre el Lote D seis del plano de subdivisión de Lot D, que forma parte del resto no enajenado de la hijuela Nº 18. Correspondiente a la



División de la Comunidad Indígena encabezada por don Manuel Truitrui y José Cumilai, Ubicada en el Lugar Lepu, comuna de Panguipulli, perteneciente a don Luis Carlos González Mora y otros, título de dominio inscrito a fojas 603 número 661 del Registro de Propiedad del año 2.015; Certificado avalúo fiscal rol 00178-00898; certificado Ministerio de Vivienda y Urbanismo Nº 2899160 de fecha 28 de diciembre de 2.023; Certificado de inscripción de dominio, título de dominio inscrito a fojas 603 número 661 del Registro de Propiedad del año 2.015; certificado Nacimiento Carlos Andrés González Cabrera RUN 17.694.023-9; convenio prestación servicios a honorarios de fecha 01 de enero de 2.023 suscrito entre don Carlos Andrés González Cabrera y Pedro Burgos Vásquez; convenio prestación servicios a honorarios de fecha 02 de enero de 2.024 suscrito entre don Carlos Andrés González Cabrera y Pedro Burgos Vásquez; decreto Alcaldicio Nº 78 de fecha 06 de enero de 2.023 que aprueba convenio; decreto Alcaldicio Nº 140 de fecha 18 de enero de 2.024 que aprueba convenio; memo 438 Jefe Finanzas CORMUPA de fecha 09 de mayo 2025.

De fojas 92 a 136, se acumula expediente 24-2025 por tratarse de los mismos hechos descritos en la presentación en la causa rol 25-2025 por la parte reclamante.

De fojas 138 a 185, se acumula expediente 26-2025 por tratarse de los mismos hechos descritos en la presentación en la causa rol 25-2025 por la parte reclamante.

De fojas 217 a 242, la parte requerida responde reclamación y opone excepciones, señalando como hechos que el requerido fue electo alcalde de Panguipulli en 2021, venciendo al alcalde Valdivia, quien volvió a asumir el cargo en octubre de 2024. El último día del requerido como alcalde fue el 5 de diciembre de 2024, y ha sido un servidor público durante su carrera; añade que, en cuanto a excepción de falta de



legitimación activa, menciona que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que el tribunal electoral regional declarará ciertas causales de inhabilidad. El alcalde, concejales o concejalas pueden requerir esto y deben informar sobre cualquier causa al conocerla. La cesación en el cargo, tratándose de estas causales, operará una vez ejecutoriada la sentencia que declare su existencia; agrega que este requerimiento del alcalde Valdivia no se dirige a un concejal en ejercicio ni a uno que ya no lo sea, sino a un ex alcalde. La ley establece que este tipo de procedimiento puede iniciarse dentro de los seis meses posteriores al fin del mandato edilicio, únicamente para aplicar la causal de inhabilidad prevista en el inciso octavo del artículo 60 y en el inciso segundo del artículo 77. En relación a lo dispuesto en el artículo 60, inciso cuarto, esta causal será declarada por el tribunal electoral regional respectivo a solicitud de al menos un tercio de los concejales en ejercicio, o bien por un concejal o concejala cuando el alcalde denunciado haya sido la persona afectada, siempre que en un procedimiento sumarial administrativo llevado a cabo por la Contraloría General de la República se haya comprobado la existencia de prohibiciones señaladas en el artículo 82 letras I) y m) de la Ley N° 18.883, en relación con el artículo 126 del mismo cuerpo legal. En tales casos, se entenderá que existe una contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, y en estos procedimientos no será necesario contar con patrocinio de abogado; Por lo tanto, este requerimiento solo puede ser realizado por concejales, como ocurre con aquellas realizadas por los tres concejales que dieron inicio a las causas ROL 24-2025 y 25-2025, pero no por el alcalde; alude también que el señor Valdivia carece de legitimación activa necesaria para iniciar un procedimiento de este tipo, por lo que su reclamación debiera de ser rechazada sin siguiera entrar en el fondo de sus alegaciones, en virtud de los antecedentes señalados en precedencia; señala que en cuanto a la excepción de prescripción de la acción se basa en lo establecido en la



normativa, específicamente en el artículo 58 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), que indica que el alcalde asumirá sus funciones según lo dispuesto en el artículo 83. Este último establece que el concejo se instalará el 6 de diciembre del año de la elección, con la mayoría absoluta de concejales electos, y que el período de mandato comienza a partir de esa fecha. Por tanto, cualquier acción debe ajustarse a este marco temporal y calendario. De esta forma, por el de la ley, el último día de mandato solo ministerio suscrito fue el 5 de diciembre de 2024, ya que el nuevo alcalde asume el día 6 de diciembre de 2024; El requerimiento fue presentado fuera del plazo legal de seis meses, ya que, según la normativa, el cómputo del plazo inicia el 5 de diciembre de 2024. Al 6 de junio de 2025, ya han transcurrido seis meses y un día, por lo que la acción se encuentra prescrita; en su fundamento derecho, señala que sobre el notable abandono de deberes e infracción de las normas sobre probidad administrativa. Señala que el concepto de "notable abandono de deberes" y la "infracción grave a las normas sobre probidad administrativa" no fueron desarrollados adecuadamente por los recurrentes. La Ley 18.695 establece que el alcalde puede ser removido por impedimento grave o notable abandono de deberes, el cual se define como cuando el alcalde o concejal transgrede inexcusable y reiteradamente las obligaciones constitucionales y legales, causando grave detrimento al patrimonio municipal y afectando seriamente la actividad municipal y las necesidades básicas de la comunidad; indica que los conceptos relacionados con la infracción grave a la probidad administrativa y el notable abandono de deberes han sido desarrollados y actualmente se aceptan definiciones específicas. La ley no define qué es la infracción grave a la probidad, pero establece que este principio implica actuar con integridad y priorizar el interés general. Su violación puede llevar a responsabilidades y sanciones conforme a la ley. Además, mencionan que el interés general requiere el



uso de medios adecuados de diagnóstico y control para asegurar una gestión eficaz y eficiente. La falta de cumplimiento de la normativa y la gestión ética de recursos públicos son aspectos clave. Se cuestiona la configuración del notable abandono de deberes, argumentando que los hechos reclamados no cumplen este criterio, pues no causan daños significativos. Este abandono se define como una serie de conductas que, aunque de forma individual no sean graves, al sumarse pueden resultar en irregularidades; se expresa que el notable abandono ocurre cuando un alcalde actúa con negligencia o dolo, causando perjuicios a la comunidad; Se detallan requisitos específicos para determinar tal abandono, incluyendo acciones inexcusablemente imputables al alcalde que causen detrimento grave al patrimonio municipal; así mismo, menciona que los deberes fundamentales del alcalde están definidos en la Constitución y en la Ley de Municipalidades, donde se afirma que es la máxima autoridad de la Municipalidad, encargándose de su dirección, administración y supervisión. No se especificó qué deber se infringió, lo que indica que no hubo infracción y, por lo tanto, no se puede aplicar la sanción de remoción; la parte requirente indica sobre los antecedentes de carácter particular a cada uno de las situaciones de hecho imputadas, de las inhabilidades y falta de abstención por conflicto de interés, indica que en cuanto Sobre doña Cynthia Elisa Camino Jarpa, niega que la referida funcionaria haya tenido o tenga ninguna relación de pareja con el suscrito. Esto invalida los argumentos de los concejales y el alcalde sobre la imparcialidad. No hay acciones indebidas. Solo agregar en este punto, que, de conformidad a lo señalado en el Código Civil, les corresponderá a los denunciantes probar este y otros infundios planteados en sus escritos, y que, hasta el momento, no existe ninguna prueba de ello; manifiesta que en cuanto a la contratación de Francisca Lasserre Martínez, en efecto es hija de su cónyuge. además, menciona que ella ingreso al municipio en 2017, en un programa de protección infantil, siendo el alcalde de la



comuna el señor Valdivia Orias, quien realizo la contratación, porque reunía los requisitos para ser contratada en su oportunidad. y que el no tuvo influencia en su contratación. Desde entonces, ha tenido contratos anuales hasta 2024. Se reconoce que hubo un cambio en su sueldo, pero este fue similar al de otra persona del equipo y que esto se debía a un aumento en las responsabilidades. También insinúa que hay un fondo político detrás de las quejas sobre su salario, mencionando un caso similar con otra persona que también tiene un contrato significativo. Añade que el origen de la contratación se da por un contrato del primer mandato del señor Valdivia Orias. La inhabilidad de contratar parientes no se aplica aquí, ya que es una continuidad de servicios con más funciones, en razón de lo cual no advertimos vulneración a prohibición alguna a este respecto; indica que en cuanto la frustrada compra de Terreno en Chauquén, la compra de un terreno en Chauquén, Panguipulli, fue frustrada, pero no resultó en pérdidas para el patrimonio municipal. A lo largo de los años, este terreno ha sido utilizado como espacio público, especialmente como estacionamiento para la playa, que es un destino turístico popular. Desde 2015, el municipio ha intentado adquirir el terreno para desarrollar proyectos costeros. En 2017, se intentó una compra que no prosperó. A finales de 2022, Carlos González expresó el deseo de su familia de vender el terreno al municipio, y la propuesta fue recibida positivamente. La Secretaría Comunal de Planificación comenzó a preparar la compra, revisando documentos y buscando financiamiento. La compra fue aprobada por el concejo municipal, pero finalmente no se concretó debido a la decisión de la nueva administración tras los resultados de las elecciones. Por lo tanto, no hay ninguna falta o incumplimiento por parte de la administración actual; simplemente no se completó un negocio que debió ser finalizado por ellos. La acusación de falta de probidad se basa en un contrato que nunca implicó obligaciones ni perjuicios para la municipalidad, y no hay evidencia de mala fe de su parte; adiciona que



respecto al no pago de servicios básicos mencionado en los casos, hay varios puntos importantes a considerar. Primero, no se tuvo un problema en la entrega de servicios, ya que estos continuaron disponibles y no hubo cierre de las unidades involucradas. Segundo, los reclamantes no mostraron que conocieran esta situación, y que tampoco fue informado por el director de Administración y Finanzas o la Dirección de Control, quienes debieron avisar y regularizar el pago. Además, por Decreto Nº 2738 del 3 de octubre de 2018, se designó a Eugenio Huenufil Spuler como Inspector Técnico de Servicios para la Municipalidad de Panguipulli. Él es responsable de gestionar la telefonía e internet, pero no cumplió con su deber. Finalmente, no se puede decir que hubo un daño al patrimonio municipal, ya que los servicios impagos mencionados son deudas que el municipio debe pagar; indica que en cuanto los procesos sin Rendir y devolución, se debe negar y calificar como falso lo denunciado por los requirentes. Según el acta de entrega de gestión financiera del Departamento de Administración y Finanzas de la Corporación Municipal de Panguipulli, todos los recursos de programas y subvenciones estaban rendidos hasta el 30 de octubre de 2024. Están respaldados por informes técnicos firmados por Felipe Coronado Henríquez, encargado contable de rendiciones del área salud, quien corrobora la conformidad con la normativa aplicable, específicamente la Resolución Nº 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República. Respecto al supuesto abandono de deberes que se atribuye, el informe técnico afirma que, durante la administración saliente (2023-2024), todos los recursos fueron gestionados correctamente y se presentaron a tiempo, sin observaciones en las auditorías. Esto demuestra que no hubo retrasos ni negligencia por mi parte en este período. Sobre la acumulación de atrasos desde el año 2021, es importante precisar que durante su administración trabajó en la regularización de atrasos en las rendiciones, que se generaron principalmente por la emergencia de COVID-19. Este proceso está



detallado en el informe del encargado de rendiciones de salud, destacando la creación de un cargo específico para manejar esta situación. Se siguió estrictamente el procedimiento establecido por Contraloría desde 2022 hasta el final de mi mandato en 2024. Desde diciembre de 2024, las rendiciones aprobadas se lograron gracias al trabajo de la administración anterior, que dejó todas las rendiciones cargadas en la plataforma SISREC. Solo faltaba la aprobación del Ministro de Fe y la firma del jefe de Finanzas. En 2025, los programas como SAR, SUR, CECOSF, Leyes y Per Cápita ya estaban rendidos y solo necesitaban la validación final para desbloquear futuras transferencias. El cierre de los 46 programas de 2021 a 2024 fue gestionado por la administración saliente sin retrasos ni cancelaciones en las transferencias. Sobre las 382 rendiciones pendientes mencionadas, se aclara que estaban ingresadas en SISREC por la administración saliente, esperando el proceso final por parte del Ministro de Fe y la firma del jefe de finanzas municipales. Las demoras después de noviembre de 2024 son responsabilidad de la nueva administración municipal. Asimismo, el estado de situación entregado por administración anterior es suficiente para continuar con los procesos pendientes. Es responsabilidad de las nuevas autoridades gestionar adecuadamente las rendiciones de cuentas para evitar perjuicios al patrimonio municipal y al sistema de salud; manifiesta que, sobre los juicios y el daño a la fe pública, el letrado que redactó el recurso en nombre del alcalde y los concejales usa conceptos legales de manera engañosa, especialmente el de fe pública, y presenta los hechos de forma incorrecta. Se trata de dos situaciones diferentes: la terminación anticipada de un contrato con una empresa que no cumplió y un juicio que comenzó después de la firma de un contrato, en el cual la municipalidad no es demandada. En relación del juicio civil, que se origina por la demanda de una empresa incumplidora, debemos de clarificar una serie de puntos de hecho y de derecho. Las comisiones evaluadoras tienen



facultades de proponer al alcalde una determinada actuación, ya sea adjudicando una licitación, proponiendo esta se revoque o sea declarada desierta, entre otra, pero el acto administrativo que resuelve esa proposición es y será siempre el decreto alcaldicio. En efecto La LOCM en su artículo 12 indica que las resoluciones de las municipalidades se llaman ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios instrucciones. Las ordenanzas son normas obligatorias para la comunidad y pueden incluir multas para infractores, que no superarán cinco unidades tributarias mensuales, aplicables por los juzgados de policía local. Los reglamentos municipales son normas generales sobre asuntos internos de la municipalidad y son permanentes. Los decretos alcaldicios tratan sobre casos específicos, mientras que las instrucciones son directrices para los subalternos. Todas estas resoluciones deben ser públicas y publicarse en sistemas digitales de la municipalidad. De aquí, queda en claro de que las actuaciones de estas comisiones no tienen valor por sí mismas y que no se encuentran recogidas dentro de las resoluciones que adoptan las municipalidades. Luego, estamos frente a una circunstancia en que una empresa incumplió un contrato gravemente, lo que llevó a su terminación. Posteriormente, la empresa judicializa la situación sin una decisión firme. Preocupa que este juicio se utilice políticamente, proporcionando argumentos que podrían beneficiar a la empresa en el proceso civil, lo cual es cuestionable para las autoridades involucradas. Ahora bien, respecto del segundo de los juicios, se debe recalcar que la Municipalidad de Panguipulli no es parte de este juicio y que se trata de un diferendo entre privados. No obstante, ello, el contrato con los comités de vivienda se celebró sin juicios ni litigios registrados. Las certificaciones del Conservador de Bienes Raíces confirmaron la ausencia de gravámenes, lo que permitió acceder a financiamiento público para la adquisición. Apunta que se trata de un conflicto surgido a posteriori, respecto de los cuales ni la Municipalidad de Panguipulli ni este recurrido tiene responsabilidad



alguna. Se trata simplemente de un acto de aprovechamiento político de los requirentes, con el fin último de enlodar mi nombre y de ver afectada cualquier fututa nueva postulación al sillón edilicio; en cuanto a la malversación de fondos públicos CORMUPA, niegan las acusaciones de malversación de fondos públicos por este servidor público lo haya efectuado, consentido o tolerado. De la mera lectura del cargo, en especial del título, se habla de la existencia de un delito que es el de malversación de fondos públicos, que constituye un delito tipificado en el código penal, que implica la apropiación o uso indebido de fondos públicos. Dado que se trata de un ilícito penal, la responsabilidad de determinar su existencia corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia, tras una acusación formal del Ministerio Público. En este contexto, exponen que esta problemática está relacionada con la transferencia de fondos solicitados a la SUBDERE desde el año 2022, específicamente destinados al pago de diversos bonos para el personal del área de Salud. Señala que desde 2021, los bonos solicitados para el área de Salud se depositaron en la cuenta corriente presupuestaria Nº 71909000097 correspondiente al área de Administración, ya que todos los bonos llegaban a esa cuenta y debían ser distribuidos posteriormente. Sin embargo, en algunos casos, las transferencias a la cuenta específica del área de Salud no se realizaron. Para cumplir con los plazos, se utilizó financiamiento de recursos per cápita para pagar estos bonos, con la expectativa de reembolso posterior, pero la transferencia desde la cuenta de Administración nunca se concretó. Al revisar la contabilidad del área de Administración, se detectó que los ingresos estaban registrados cuenta Devoluciones y incorrectamente en la Reembolsos No Provenientes de Impuestos. Para corregir esta situación, fue necesario reanudar la contabilidad de gran parte de los ingresos del año 2024 y realizar un análisis detallado de las cuentas de traspaso. En el año 2024, la corporación se solicitó un valor mayor correspondiente al pago de Bono



Escolar año 2024, \$102.890.777, por lo contrario, de los montos gastados por las áreas fueron \$61.139.717 quedando la diferencia en la en la cuenta de administración. Conjuntamente, se identificaron transferencias pendientes de devolución entre las cuentas de Administración y las áreas de Educación y JUNJI. Las correcciones de registros de ingresos de 2023 y 2022 facilitarán un análisis detallado para verificar montos no transferidos a las áreas correspondientes. Por último, la encargada del área de Licencias informó que, durante el año 2022, se efectuó un retiro de fondos desde la cuenta corriente N° 71909000348, para el pago de franquicia tributaria, autorizado por Felipe Rodríguez Vidal. La devolución fue retenida por el Servicio de Impuestos Internos, impidiendo el reembolso a OTIC Cimientos. En diciembre de 2024, se recibieron los fondos, y se debe reembolsar \$41.689.044. Además, se notificó al Ministerio Público por posibles indicios de malversación de fondos. La administración implementó procedimientos de autorización y control para optimizar las transferencias internas y anticipos entre áreas debido a retrasos en remesas de organismos externos. El jefe de Finanzas solicita informes de disponibilidad de fondos al tesorero, quien analiza los recursos. Si hay disponibilidad, se gestionan los movimientos financieros vía correo, aunque la falta de comunicación de los encargados puede generar incertidumbres en las transferencias pendientes. El área Administración desempeña un papel crucial y se financia con un 6% de la subvención per cápita de salud y un 8% de la educación, además de recursos propios. Utiliza estos fondos para cubrir gastos de personal administrativo y colaborar con áreas técnicas. No hay impedimentos legales para que administre sus recursos en estas áreas. La Jefatura de Administración y Finanzas solicita regularmente informes contables y financieros para resolver situaciones pendientes. Hasta el 30 de noviembre de 2024, no se reportaron irregularidades en las transferencias o conciliaciones, y la actual jefa de finanzas, Sra. Fernanda Rodríguez



Peña, no incluyó información sobre cuentas por cobrar en su entrega de información. Además, en el año 2022, la Corporación implementó una normalización administrativa y estableció una estructura presupuestaria, mejorando el orden financiero. Los recursos se enfocaron en fines institucionales y la asignación de bonos fue transitoria, garantizando que los gastos del área de salud estuvieran correctamente financiados. Respecto al traspaso de fondos de la cuenta de licencias médicas para el pago de la franquicia tributaria se realizó debido a un régimen tributario mal aplicado por la administración anterior. Las gestiones sistemáticas entre 2023 y 2024 llevaron a la normalización tributaria y a la liberación de recursos por parte del SII. Añade que el Departamento de Control Interno de la Corporación Municipal es responsable de fiscalizar movimientos financieros, pero falló al no reportar las irregularidades. Al mismo tiempo, autorizó transferencias de recursos de cuentas de licencias médicas sin identificar correctamente su área de origen. Por otro lado, se encontraron transferencias pendientes de devolución. Estas incluyen anticipos de las cuentas de Administración hacia Educación y JUNJI. Desde la cuenta de Administración Presupuestaria, se deben \$22. 457. 200 a Educación para cubrir FAEP 2024 y transporte. Desde la cuenta de Intereses de Administración, se deben \$12. 800. 000 a JUNJI por atraso en aportes, y \$52. 281. 740 a Educación por atrasos en aportes para servicios básicos y transporte. Con respecto a los años 2023 y 2022, que actualmente se están corrigiendo los registros de ingresos. Esto ayudará a hacer un análisis detallado más adelante para comprobar los montos que no fueron enviados a las correspondientes. Menciona que la encargada del área de Licencias informó que en 2022 se retiraron fondos de la cuenta corriente Nº 71909000348, gestionada por el área de Administración – Recuperación Licencias Médicas. Este retiro fue autorizado por Felipe Rodríguez Vidal, quien era el jefe del Departamento de Administración y Finanzas. Los



fondos eran un anticipo para el pago de la franquicia tributaria de 2022, pero la devolución fue retenida por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en la declaración de ese año, lo que impidió devolver el monto completo a los intermediarios del OTIC Cimientos. Con fecha 02 de diciembre de 2024, se recibieron los fondos retenidos después de corregir observaciones. El monto a devolver es de \$41. 689. 044. Se realizó el decreto para cancelar el anticipo y distribuir el pago de licencias. Además, se enviaron a la Fiscalía datos sobre posible malversación de fondos públicos. Añade que, en su administración se estableció procedimientos de autorización y control para las transferencias internas y anticipos entre áreas, debido a retrasos en los fondos de organismos externos. El jefe de Finanzas pedía un informe al tesorero sobre la disponibilidad de fondos en las cuentas de Administración para apoyar las áreas técnicas. Si había recursos, se solicitaban movimientos financieros por correo, involucrando a contadores y jefes correspondientes. Este proceso dependía de los reportes de los encargados, pero no se podía saber de transferencias pendientes sin que informaran. Asimismo, en el 2022, la Corporación comenzó a organizar su administración al crear una estructura presupuestaria. Esto permitió un mejor manejo financiero y contable basado en proyectos. Los recursos se usaron para fines institucionales y se gestionaron dentro de la Corporación. El uso temporal de recursos per cápita para bonos fue esperado hasta recibir reembolsos. Es importante mencionar que estos recursos para bonos no impiden financiar el gasto operativo del área de salud. El traspaso de fondos de la cuenta de licencias médicas para pagar la franquicia tributaria se debió a un mal manejo del régimen tributario por la ex administración. Esto causó retenciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) en las devoluciones anuales de impuestos. Entre 2023 y 2024, se trabajó para normalizar la situación tributaria, logrando que a finales de 2024 el SII liberara los recursos congelados gracias a las gestiones de la ex administración, expresa que s



e incluirá un informe sobre esto en el otrosí respectivo. En la Corporación Municipal, existe un Departamento de Control Interno que debe supervisar y reportar errores en movimientos financieros. Este departamento no informó sobre problemas y también autorizó aportes desde Administración a áreas técnicas. Al mismo tiempo, permitió la transferencia de recursos en cuentas de licencias médicas sin saber a qué área pertenecían esos fondos. No existe evidencia que respalde la idea de que la ex administración cometió apropiación indebida de fondos públicos para beneficio personal. Las situaciones encontradas son procesos administrativos que se pueden corregir y métodos de financiamiento interno necesarios debido a un grave déficit financiero heredado; aquel déficit fue identificado en un informe de auditoría de Deloitte S. A (2023), que reveló faltantes en educación de más de \$1. 311 millones, saldos no registrados de \$1.681 millones ante la Superintendencia de Educación, deudas con JUNJI por más de \$80 millones, y contrataciones en Salud fuera del presupuesto y la ley vigente. Estos antecedentes fueron denunciados oficialmente mediante el Oficio N. º 635/2023 por el alcalde y presidente de la Corporación ante la Contraloría General de la República. También se enviaron al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para acciones legales. La Contraloría aceptó la Ио de ingreso 366435-2023 y comenzó denuncia bajo el investigaciones. Los traspasos de recursos a salud, educación y JUNJI fueron necesarios para mantener operaciones por falta de liquidez, sin intención de apropiación indebida por parte de la ex administración. Por otro lado, tampoco existe una determinación de la ilicitud de los actos que se reprochan o de la ilicitud de estos, siendo una simple apreciación de parte de los acusadores. En consecuencia, esta imputación carece de relevancia, seriedad y contundencia ni del menor indicio de la existencia de un ánimo defraudatorio. Se trata, en apariencia, de procedimientos administrativos ejecutados por servidores públicos en el ejercicio de sus



funciones; indica que, en cuanto a los pagos realizados al concejal Carlos Durán de parte de la CMD, recibió dos cheques en su cuenta en 2023, pero no se sabe por qué. Se niega que estos depósitos se hayan hecho con la aprobación de la actual administración, ya que el alcalde no puede conocer todos los pagos y cheques emitidos. No hay pruebas de que el concejal haya actuado de manera corrupta. Se sugiere que se inicie un sumario administrativo sobre los funcionarios involucrados y se presente una denuncia penal contra el concejal, debido a la gravedad de la situación. Se considera absurdo que la denuncia se dirija al ex alcalde, quien no tuvo participación en estos eventos; acompaña los siguientes documentos: acta de entrega de gestión del departamento de administración y finanzas de la CORMUPA, de noviembre de 2024; oficio de la Contraloría Regional Los Ríos folio Nº E366435/2023, de 11 de julio de 2023, que informa sobre incorporación de hechos denunciados al proceso de planificación; convenio de prestación de servicios entre la Municipalidad de Panguipulli y Bárbara Leal Pichiguén de 2 de enero de 2024; convenio prestación de servicios entre la Municipalidad de Panguipulli y Francisca Lasserre Martínez, de 2 de enero de 2024; convenio prestación de servicios entre la Municipalidad de Panguipulli y Francisca Lasserre Martínez, de 1° de abril de 2020; decreto N° 3282 de 31 de diciembre de 2020 de la Municipalidad de Panguipulli; memorando N° 2493 de 25 de noviembre de 2024, a Felipe Rodríguez Vidal, jefe de finanzas de CORMUPA Felipe Coronado Henríquez, contable de rendiciones área de salud de presupuestos CORMUPA, que contiene informe resumen de las rendiciones de cuentas realizadas por el área de salud durante el periodo 2022 al 2024; decreto 942 de 17 de abril de 2017 de la Municipalidad de Panguipulli; decreto 2738 de 3 de octubre de 2018 de la Municipalidad de Panguipulli; informe de ingresos y gastos presupuestarios por programa de la CORMUPA, de 22 de noviembre de 2024, preparado por Nicole Carrillo; informe Final Nº 76/2025 Contraloría



Regional Los Ríos corporación municipal de deporte y recreación de Panguipulli, de 30 de abril de 2025; escrito de denuncia por el delito de malversación de caudales públicos, presentado en representación de la CORMUPA por el abogado Álvaro Jaramillo Knopel; formulario de denuncia emitido por el Ministerio Público ingresado por el abogado Álvaro Jaramillo Knopel; informe de situación tributaria período: años 2021 al 2024 (al 30 de octubre de 2024) de CORMUPA; informe de auditoría emitido por Deloitte, de 22 de noviembre de 2022, respecto de la CORMUPA; correo electrónico de Contraloría general de la República, de 4 de julio de 2024, que da cuenta de recepción denuncia Nº W034146/2023; memorándum N° 2168/2024 de 29 de octubre de 2024, de Felipe Rodríguez Vidal, jefe de finanzas de CORMUPA; memorando Nº 2469 de 22 de noviembre de 2024, a Felipe Rodríguez Vidal, jefe de finanzas de CORMUPA, de encargada unidad de presupuestos CORMUPA, que hacer entrega del informe de cambios y modificaciones al sistema contable y presupuestario informe de ingresos y gastos presupuestarios por programa. correspondiente al período 2021 al 2024, con corte al 30 de octubre de 2024; memorando N° 2546 de 26 de noviembre de 2024, a Felipe Rodríguez Vidal, jefe de finanzas de CORMUPA, de encargada unidad de presupuestos CORMUPA, que hacer entrega del informe de análisis y cuadratura de cuentas contables bancarias, correspondiente al período 2021 al 2024, con corte al 30 de junio de 2024; minutas de auditoría de la CORMUPA, correspondiente al año 2022, firmados por Felipe Rodríguez Vidal, jefe de administración y finanzas de la CORMUPA; correo electrónico de Raúl Alejandro Silva Mardones, de miércoles, 30 de octubre de 2024 a Álvaro Peña Duran, donde se informa que con fecha 30/10/2024 han quedado revisadas y liberadas las rentas de los Años Tributarios 2022 y 2024, y por otra parte rectificada la Renta del Año Tributario 2023. De acuerdo a lo indicado, se dan por cerradas sus peticiones administrativas folios 77324125163, 77324125163 y



77324141733.; oficio de la Contraloría Regional Los Ríos folio Nº E371887/2023, de 24 de julio de 2023, que informa sobre incorporación de hechos denunciados al proceso de planificación; oficio Nº 635-23 de 3 de julio de 2023, de la Municipalidad de Panguipulli.

De fojas 618 a 704, la parte reclamante contesta excepciones presentadas en la contestación del requerimiento.

A fojas 728, se recibe la causa a prueba, fijándose como hecho sustancial y controvertido la efectividad que don Pedro Burgos Vásquez, con ocasión del ejercicio de su cargo de Alcalde de la comuna de Panguipulli, dentro de las funciones y responsabilidades propias de su cargo de elección popular, incurrió en acciones u omisiones que afecten manifiestamente la probidad administrativa o que hubieren implicado un notable abandono de los deberes propios de la investidura de la cual gozaba. Hechos que las constituyen.

De fojas 735 a 747, la parte reclamante acompañan como prueba documental, los siguientes documentos: memorándum N° 12, de fecha 20 de febrero de 2025, suscrito por el asesor jurídico de la Municipalidad de Panguipulli, Eduardo Greenhill González y dirigido a Carol Delgado Jeldres, Contralora Regional de Los Ríos, solicitando pronunciamiento por los convenios suscritos entre Francisca Lasserre Martínez y el ex Alcalde, Pedro Burgos Vásquez (consta de 4 páginas y rola de fs. 72 a 75); certificado Nacimiento Francisca Ignacia Laserre Martínez, RUN 18.590.127-0, Folio: 500609986062, de fecha 20 de febrero de 2025, con firma electrónica avanzada de Víctor Rebolledo Salas, Jefe de Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación (consta de 1 página y rola a fs. 60); certificado Matrimonio Pedro Burgos Vásquez con Yasna Martínez Ochoa, Folio: 500609986673, de fecha 20 de febrero de 2025, con firma electrónica avanzada de Víctor Rebolledo Salas, Jefe de Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación (consta de 1 página



y rola a fs. 59); convenio de prestación de servicios a honorarios, de fecha 31 de enero de 2023, suscrito entre doña Francisca Ignacia Laserre Martínez y Pedro Burgos Vásquez (consta de 3 páginas y rola de fs. 61 a 63, coindice con el 7); convenio de prestación de servicios a honorarios, de fecha 02 de enero de 2024, suscrito entre doña Francisca Ignacia Laserre Martínez y Pedro Burgos Vásquez (consta de 7 páginas y rola de fs. 52 a 54, correspondiente al incremento de \$100.000.- de la mensualidad originalmente convenida y luego de fs. 55 a 58, tenemos el convenio original de ese año 2024); convenio de prestación de servicios a honorarios, de fecha 01 de noviembre de 2024, suscrito entre doña Francisca Ignacia Laserre Martínez y Pedro Burgos Vásquez (consta de 4 páginas); convenio de prestación de servicios a honorarios, de fecha 31 de enero de 2023, suscrito entre doña Francisca Ignacia Laserre Martínez y Pedro Burgos Vásquez (consta de 3 páginas y rola de fs. 61 a 63, coincide con el 4); convenio de prestación de servicios a honorarios, de fecha 02 de enero de 2024, suscrito entre doña Francisca Ignacia Laserre Martínez y Pedro Burgos Vásquez, que otorga un pago adicional con fondos propios municipales (consta de 7 páginas y rola de fs. 52 a 58); decreto Alcaldicio Nº 342, de fecha 31 de enero de 2023, que aprueba diversos convenios de prestación de servicios a honorarios, entre ellos, el de Francisca Ignacia Lasserre Martínez (consta de 1 página y rola a fs. 69); decreto Alcaldicio Nº 349, de fecha 29 de enero de 2024, que aprueba diversos convenios de prestación de servicios a honorarios, entre ellos, el de Francisca Ignacia Lasserre Martínez (consta de 1 página y rola a fs. 70); decreto Alcaldicio Nº 3.657, de fecha 21 de noviembre de 2024, que aprueba diversos convenios de prestación de servicios a honorarios, entre ellos, el de Francisca Ignacia Lasserre Martínez (consta de 1 página y rola a fs. 71); oficio de la Contraloría Regional de Los Ríos, Folio E65008-2025, de fecha 17 de abril de 2024, firmado electrónicamente por Carol Ivonne Delgado Jeldres, Contralora Regional, señalando: "persona que



indica, que fue contratada a honorarios por la Municipalidad de Panguipulli, se encontraba afectada por la inhabilidad de ingreso contenida en el artículo 54, letra b), de la Ley Nº 18.575" (consta de 4 páginas y rola de fs. 76 a 79); informe Final de la Contraloría Regional de Los Ríos Nº 76-2025, de fecha 30 de abril de 2025, específicamente, las páginas 56, 57 y 58 (consta de 4 páginas y rola de fs. 86 a 89); convocatoria de fecha 30 de abril de 2025, oficio Nº E20490 de la Contraloría Regional de Los Ríos, para dar cuenta de la inhabilidad de ingreso de Francisca Ignacia Lasserre Martínez (consta de 5 páginas y rola de fs. 64 a 68); acta N° 20, de fecha 05 de mayo de 2025, de la sesión extraordinaria del honorable Concejo Municipal que tuvo por objeto poner en conocimiento (del cuerpo colegiado) el oficio Nº E20490, de 2025, procedente de la Contraloría Regional de Los Ríos (consta de 7 páginas); copia de la cédula de identidad del Concejal Ariel Vega Cofré (consta de 2 páginas y rola a fs. 40 y 41); copia de la cédula de identidad de la Concejala Patricia Carimán Bustos y del Concejal Cristian Godoy Vera (consta de 4 páginas y rolan de fs. 36 a 39); copia del Estatuto de la corporación municipal de Panguipulli, de fecha 15 de julio de 1982 y su Modificación, de fecha 20 de noviembre de 2007 (consta de 25 páginas); copia del acta de constitución de la corporación Municipal de deportes de Panguipulli, de fecha 02 de junio de 2009 (consta de 30 páginas); sentencias TER Los Ríos, Concejales (Rol Nº 64-2024) y Alcalde (Rol Nº 52-2024), ambas del año 2024 (consta de 7 páginas); acta complementaria de proclamación, de fecha 29 de noviembre de 2024, sobre elección de Concejales, pronunciado por el Tribunal Electoral Regional de Los Ríos (consta de 2 páginas); bases administrativas especiales, propuesta pública 80-2020, construcción infraestructura sanitaria Neltume, Panguipulli (consta de 44 páginas); demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual, causa ROL C-328-2023, "Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. con Municipalidad de



Panguipulli", tramitada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli (consta de 51 páginas); contrato de obras, de fecha 18 de junio de 2021, entre la Municipalidad de Panguipulli y la Empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A. y oficio Nº 707/2021 por medio del cual, el Alcalde, Pedro Burgos Vásquez solicita custodia de la garantía por el Fiel y oportuno cumplimiento del contrato al intendente de Los Ríos, Sr. César Asenjo Jerez (consta de 14 páginas); ebook Causa ROL C-47-2024, Lagos con Municipalidad de Panguipulli, del Juzgado Letras y Garantía de Panguipulli (consta de 31 páginas); ebook Causa ROL C-510-2.024, Lagos con Municipalidad de Panguipulli y Comités de Vivienda, del Juzgado Letras y Garantía de Panguipulli (consta de 109 páginas); sentencia Tribunal Electoral Regional de Los Ríos, de fecha 08 junio de 2021, ROL 3667-2021, que determina Alcalde definitivamente electo (consta de 4 páginas); decreto N° 169, de fecha 11 de enero de 2024, que aprueba texto refundido del reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna de Panguipulli, suscrito por Pedro Burgos Vásquez, Alcalde; Manuel Huenchuleo Mora, director de control; y, Juan Ángel Eugenín, Secretario Municipal (consta de 11 páginas); Acta Nº 1, constitutiva del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Panguipulli, de fecha 17 de julio de 2024, suscrita por Pedro Burgos Vásquez, en calidad de Presidente del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Panguipulli; y, por Juan Ángel Eugenín, como Ministro de Fe (consta de 17 páginas); acta N° 25, sesión ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 30 de julio de 2024. En la letra e) de la tabla con los temas a tratar está: "Someter a aprobación la celebración de Contrato de Compraventa del LOTE D SEIS del plano de subdivisión del LOTE D, que forma parte del resto no enajenado de la Hijuela Nº 18, correspondiente a la división de la comunidad indígena encabezada por don Manuel Truitrui y José Cumilai, ubicada en el lugar Lepu, comuna de Panguipulli, perteneciente a don Luis



Carlos González Mora y otros y a la sucesión de doña Noemí González Mora; por una suma de \$200.000.000.- (doscientos millones) de pesos, las que se pagarán en tres cuotas anuales, a saber: "1) Al momento de la firma del contrato: \$50.000.000.- de pesos; 2) Un año posterior a la firma del contrato \$75.000.000.- de pesos; y 3) dos años posteriores a la firma del contrato \$75.000.000.- de pesos" (consta de 14 páginas); correo electrónico de fecha 26 de julio de 2024, por medio del cual se remite a Juan Ángel Eugenín, Secretario Municipal, el informe sobre compraventa de inmueble para proyecto "Playa Chauquén", de fecha 24 de julio de 2024, elaborado por Roberto Montecino Vergara, Director de SECPLAN y Cristian Cuadra Aguilar, asesor jurídico de SECPLAN, respecto del Lote D Seis del plano de subdivisión del LOTE D, que forma parte del resto no enajenado de la Hijuela Nº 18, correspondiente a la División de la Comunidad Indígena encabezada por don Manuel Truitrui y José Cumilai, ubicada en el lugar Lepu (consta de 10 páginas); certificado de prohibiciones e interdicciones, de fecha 18 de enero de 2024, del "resto de derechos sobre el Lote D seis del plano de subdivisión del Lote D, que forma parte del resto no enajenado de la hijuela Nº 18, correspondiente a la división de la comunidad indígena encabezada por don Manuel Truitrui y José Cumilai, ubicada en el lugar Lepu, comuna de Panguipulli, perteneciente a don Luis Carlos González Mora y otros, cuyo título de dominio se encuentra inscrito a fojas 603, número 661 del Registro de Propiedad del año 2015", suscrito por Leonardo Calderara Emaldía, Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Panguipulli (consta de 1 página); certificado de Litigios, de fecha 18 de enero de 2024, del "resto de derechos sobre el Lote D seis del plano de subdivisión del Lote D, que forma parte del resto no enajenado de la hijuela Nº 18, correspondiente a la división de la comunidad indígena encabezada por don Manuel Truitrui y José Cumilai, ubicada en el lugar Lepu, comuna de Panguipulli, perteneciente a don Luis Carlos González Mora y otros, cuyo



título de dominio se encuentra inscrito a fojas 603, número 661 del Registro de Propiedad del año 2015", suscrito por Leonardo Calderara Emaldía, Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Panguipulli (consta de 1 página); certificado de Hipotecas y Gravámenes, de fecha 18 de enero de 2024, del "resto de derechos sobre el Lote D seis del plano de subdivisión del Lote D, que forma parte del resto no enajenado de la hijuela N° 18, correspondiente a la División de la Comunidad Indígena encabezada por don Manuel Truitrui y José Cumilai, ubicada en el lugar Lepu, comuna de Panguipulli, perteneciente a don Luis Carlos González Mora y otros, cuyo título de dominio se encuentra inscrito a fojas 603, número 661 del Registro de Propiedad del año 2015", suscrito por Leonardo Calderara Emaldía, Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Panguipulli (consta de 1 página); certificado de Avalúo Fiscal, Segundo Semestre de 2024, de fecha 26 de julio de 2024, del Bien Raíz "LOTE D 6 CHAUQUÉN LEPU", ROL DE AVALÚO 00178-00898, del Servicio de Impuestos Internos, por la suma de \$22.531.206 (consta de 1 página); informe de situación de inmueble, N° Certificado: 2899160, de fecha 28 de diciembre de 2023, respecto de inmueble ubicado en Lote D 6 Chauquén Lepu, de la comuna de Panguipulli, Rol de Avalúo Nº 00178-00898, señalando que no se encuentra afecto a expropiación por SERVIU de Los Ríos (consta de 1 página); copia de Inscripción del Registro de Propiedad de Panguipulli, de fecha 18 de enero de 2024, de fojas 603 número 661 del año 2015, respecto de la propiedad consistente en el LOTE D, de 33.600 metros cuadrados, que forma parte del resto no enajenado de la Hijuela Nº 18 de 5 hectáreas, aproximadamente, correspondiente a la División de la Comunidad Indígena encabezada por don Manuel Trutrui y José Cumilai, ubicada en el lugar Lepu, de la comuna de Panguipulli suscrito por Leonardo Calderara Emaldía, Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Panguipulli (consta de 4 páginas); certificado de nacimiento de Carlos Andrés González Cabrera (hijo de Luis



Carlos González Mora), de fecha 03 de junio de 2025, suscrito por Víctor Rebolledo Salas, Jefe de Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación (consta de 1 página); convenio de prestación de servicios a honorarios, de fecha 01 de enero de 2023, suscrito entre Pedro Javier Burgos Vásquez, Alcalde; y, Carlos Andrés González Cabrera, a objeto de "ejecutar acciones de índole social y administrativo en las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna de Panguipulli, año 2023", con vigencia del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2023, con específicas labores de "gestor comunitario, en prevención de riesgos respecto de temas de APR en la comuna de Panguipulli, asistiendo a reuniones en terreno y efectuando visitas domiciliarias emergentes, entre otras funciones que encomiende el director o jefatura directa" (consta de 3 páginas); convenio de prestación de servicios a honorarios, de fecha 02 de enero de 2024, suscrito entre Pedro Javier Burgos Vásquez, Alcalde; y, Carlos Andrés González Cabrera, en el marco del Programa Comunitario "impulsando en el desarrollo comunitario a los habitantes de la comuna de Panguipulli, año 2024", con vigencia del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2024, con específicas labores de "gestor comunitario, en prevención de riesgos respecto de temas de APR en la comuna de Panguipulli, asistiendo a reuniones y efectuando visitas domiciliarias emergentes, entre otras funciones que puedan ser encomendadas por su director, encargado y/o gestor" (consta de 3 páginas); decreto Nº 78, de fecha 06 de enero de 2023, que aprueba diversos convenios de prestación de servicios a honorarios, entre ellos, el de Carlos Andrés González Cabrera, suscrito por Pedro Burgos Vásquez, Alcalde; Manuel Huenchuleo Mora, Director de Control; y, María Paz Coloma, Secretaria Municipal (S) (consta de 1 página); decreto N° 140, de fecha 18 de enero de 2024, que aprueba diversos convenios de prestación de servicios a honorarios, entre ellos, el de Carlos Andrés González Cabrera, suscrito por Pedro Burgos



Váquez, Alcalde; Álex Gómez Cifuentes, Director de Control (S); y, Juan Ángel Eugenín, Secretario Municipal (consta de 1 página).

De fojas 1.562 a 1.569 se incorpora acta de prueba testimonial celebrada en la causa de autos.

A fojas 1.607 se hace constar la celebración de alegatos por los abogados de las partes de la causa de autos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, este Tribunal Electoral Regional debe pronunciarse acerca del requerimiento por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa en contra del ex Alcalde de la comuna de Panguipulli don Pedro Burgos Vásquez, por acciones y omisiones acaecidas dentro de su gestión como tal, teniendo como plazo para el ejercicio de las acciones hasta dentro de los 6 meses posteriores a su periodo de ejercicio de funciones, para el solo efecto de aplicar la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos por un espacio de 5 años, de acuerdo a lo prevenido por el artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

SEGUNDO: Que, previo al pronunciamiento referido al fondo de la acción deducida, será menester, respecto de este Tribunal Electoral Regional, resolver los incidentes de falta de legitimación activa y de prescripción de la acción, promovido por la parte requerida de autos, en relación con solo uno de los requirentes, el señor Rodrigo Valdivia Orias, actual alcalde de la comuna de Panguipulli; en este orden de ideas, a este Tribunal Electoral Regional, le asiste la firme convicción que el requirente de autos, señor Valdivia Orias, por aplicación de los artículos 51 bis, inciso segundo, en relación con el artículo 60 y 77 de la L.O.C. de Municipalidades, no goza de legitimación activa para ser parte de la causa de autos, toda vez que para hacer efectiva la eventual responsabilidad del



Alcalde, posterior a los 6 meses de su ejercicio de funciones, por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa, aparecen como facultados por ley para el ejercicio de esta acción tan específica, el que aquella sea presentada por un tercio de los concejales en ejercicio, tal y como aparece en dos de los procesos actualmente la causa de autos; en relación a la excepción de acumulados a prescripción de la acción referida al requerimiento presentado también por don Rodrigo Valdivia Orias, aparece la argumentación de la parte requerida del todo razonable toda vez que, de acuerdo a la interpretación del artículo 58, en relación con el artículo 83 de la L.O.C de Municipalidades, en su parte pertinente, determina que el periodo del cargo de Alcalde se computará siempre a partir de la fecha de la instalación del Concejo Municipal, esto es, el día 6 de diciembre del año de la elección respectiva; en este contexto el Alcalde anterior necesariamente deberá terminar con su gestión municipal formalmente el 5 de diciembre del año electoral respectivo, ya que no podrían estar en ejercicio de sus funciones 2 alcaldes en un mismo día de funciones municipales; por estos razonamientos esbozados en esta consideración, este Tribunal Electoral Regional estará por acoger las excepciones antes mencionadas respecto del señor Rodrigo Valdivia Orias, manteniéndose la calidad de sujeto activo de la acción respecto de los demás requirentes de autos.

TERCERO: Que, sobre los hechos que da cuenta lo consignado en la consideración primera, lo cierto es que este Tribunal Electoral Regional, en base a las pruebas y antecedentes aportados, que constan en autos, puede concluir que, respecto del requerido, existieron una serie de situaciones, circunstancias, acciones e inobservancias, acaecidos durante el ejercicio de sus funciones de Alcalde de la Comuna de Panguipulli, que es necesario tener en consideración para la resolución del asunto



controvertido; en este orden de ideas y en relación especifica a los cargos en particular el requerido incurrió, respecto de la señora Cinthia Camino Jarpa, en una abierta falta de abstención por tener conflictos de intereses, al ser pareja desde un punto de vista sentimental, dentro del periodo que le correspondió el ejercicio de las funciones de Alcalde, situación que fue acreditada ampliamente por la prueba testimonial que se hace constar en autos, de fojas 1.562 a 1.568, como su vez por lo manifestado por la misma funcionaria, a través de su representante jurídico, en un juicio laboral que se seguía entre ella y el Municipio de Panguipulli, que se hace constar a fojas 1.633 de la causa de autos, ocasión en que se expresa que la señora Camino Jarpa es la pareja del requerido desde hace 5 años a la fecha y que tal situación era de conocimiento público y notorio en la comuna respectiva; todo lo cual hace concluir que, a juicio de este Tribunal Electoral Regional, el requerido incumplió sus deberes más fundamentales de probidad, al no abstenerse en todo lo vinculado a la contratación de su pareja en el municipio y todo lo que de ello se colige, desde lo contractual hasta el ejercicio de sus funciones; al menos debió haber representado tal situación que lo vinculaba afectivamente, siendo más transparente en el ejercicio de sus funciones; lo mismo se entenderá, por parte de este Tribunal Electoral Regional, en lo relativo al caso de la contratación de quien es su hijastra, doña Francisca Lasserre Martínez, hija de su Cónyuge, doña Yasna Martínez Ochoa, situación que también debió haber sido suficiente motivo para abstenerse de ser parte contratante, como representante legal del Municipio, en su carácter de Alcalde y la mencionada hijastra; sin perjuicio que la original contratación de la señorita Lasserre fue en la época anterior al ejercicio de las funciones de Alcalde del requerido, no es menos cierto que una vez iniciado que sea en sus funciones de Alcalde, debió haber transparentado tal situación y haberse abstenido de aquellas contrataciones que año tras año se renovaban entre aquella y el Municipio, representado por quien era



su respectivo Alcalde, el requerido de autos, situación por lo demás representada claramente en el respectivo pronunciamiento emanado desde la Contraloría Regional de Los Ríos, que se hace constar de fojas 76 a 79 de la causa de autos.

CUARTO: Que, en otro orden de ideas y vinculado a otro de los cargos que existen respecto del requerido, esto es, el efectivo pago a un miembro del Concejo Municipal, esto es, el concejal don Carlos Duran, pago efectuado a través de cheques, con cargo a fondos de la Corporación del Deporte de Panguipulli, institución respecto de la cual el Alcalde es su Presidente, su representante legal, este Tribunal Electoral Regional le asiste la plena convicción que el requerido ha faltado gravemente a sus deberes de supervigilancia y control que como máxima autoridad debe efectuar en el ejercicio de sus funciones que la comunidad de Panguipulli democráticamente le entregó; lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades que le quepan a quien recibe fondos públicos, en abierta irregularidad, pero es el requerido quien, en mérito de sus funciones debió haber ejercido sus facultades de control y supervigilancia respecto del destino y buen uso de los fondos relativos a la Corporación Municipal del Deporte, en la comuna respectiva; situación irregular que por lo demás fue manifestada por la Contraloría Regional de Los Ríos, en su informe de rigor respectivo, el que se hace constar de fojas 86 a 89 en la causa de autos.

QUINTO Que, este Tribunal Electoral Regional, en base a la extensa acreditación probatoria acompañada en la causa de autos, consistente en pruebas documentales, pruebas testimoniales y demás medios probatorios que constan en autos, también ha podido establecer fehacientemente que el requerido fue negligente en sus deberes de supervigilancia y control que todo Alcalde en ejercicio de su cargo debe tener para con la función pública de administración de una comuna desde



todos los aspectos que de ello se coligen; en relación al cargo referido a la situación de carácter reiterada vinculada, con el no pago de los servicios básicos de dependencias municipales, especialmente el caso del servicio de internet en la casa del adulto mayor; el cargo vinculado a una frustrada compra de un terreno en Chauquén, sin tomar en consideración los protocolos necesarios para su efectiva y adecuada materialización al momento de ser presentada ante el Concejo Municipal, de manera transparente y en probidad; la existencia de numerosos casos de situaciones vinculadas a procesos de programas sin rendir, con sus correspondientes montos de dinero vinculados a aquellos, muchos de aquellos sin una terminación satisfactoria en tiempo y forma, son situaciones que si bien es cierto cada una por separado no configurarían eventualmente un notable abandono de deberes, conjuntamente considerados hacen concluir en los hechos que el requerido de autos no cumplió con sus necesarios deberes de supervigilancia y control adecuados; muy por el contrario, su actuar lo fue de una forma negligente, inexcusable y de manera reiterada, durante el ejercicio de su cargo de Alcalde, con clara infracción grave a las normas de la probidad administrativa.

SEXTO: Que, muy vinculado a lo manifestado en la consideración anterior, a este Tribunal Electoral Regional le asiste la plena convicción referida a que en el actual requerimiento, se reúnen los requisitos y condiciones necesarias para configurar el notable abandono de deberes e infracción grave a las normas de probidad administrativa, teniendo como característica además el hecho de ser situaciones provocadas y ejecutadas por el requerido de manera reiterada e inexcusable, afectando la efectiva función pública municipal desde un punto de vista patrimonial como también desde un punto de vista del respeto y protección a las instituciones y la fe que la comunidad le prodiga al quehacer y ejercicio de



las funciones municipales en toda su extensión, respecto del que todo funcionario público y, con mayor razón un Alcalde, debe propender a velar y cumplir con aquella.

SEPTIMO: Que, este Tribunal Electoral Regional, viendo desde este prisma la realidad electoral del proceso reclamado, junto con las pruebas y antecedentes que fueron acompañados ante este mismo Tribunal, no le cabe sino concluir que, existen los fundamentos suficientes y necesarios para configurar el notable abandono de deberes e infracción grave a las normas de probidad administrativa en contra de la parte requerida de autos, don Pedro Burgos Vásquez.

Por estas consideraciones, este Tribunal Electoral Regional, actuando como jurado, en los términos que previene el artículo 24 de la Ley N°18.593 y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 10 y siguientes de la citada ley, artículos 51 y siguientes de Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, Auto Acordado del Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones y demás normas pertinentes,

RESUELVE:

- 1°) Se acoge la excepción previa de falta de legitimación activa y de prescripción de la acción, promovido por la parte requerida de autos, solo respecto del requerimiento presentado por don Rodrigo Valdivia Orias.
- 2°) Se acoge el requerimiento por notable abandono de deberes e infracción grave a las normas de la probidad administrativa en contra de don PEDRO BURGOS VASQUEZ, presentada por los concejales Cristian Godoy Vera, Patricia Cariman Bustos y Ariel Vega Cofre, por lo tanto, se declara la inhabilidad del requerido para ejercer cargos públicos



por el término de 5 años; todo lo cual producirá su pleno efecto una vez ejecutoriada que sea la respectiva sentencia, de conformidad con la ley.

3°) Cada parte pagará sus costas, por estimar este Tribunal Electoral Regional que han tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 25 de la ley 18.593. Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 25-2025

Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de Los Ríos, integrado por su Presidenta Titular Ministra Marcia del Carmen Undurraga Jensen y los Abogados Miembros Sres. Darío Ildemaro Carretta Navea y Cinthia Angélica Segovia Molina. Autoriza el señor Secretario Relator don Marcel Andrés Gallegos Provoste. Causa Rol N° 25-2025.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy. Valdivia, 28 de noviembre de 2025.